

EL DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA FORMACION DEL JURISTA

JAVIER PEREZ ROYO

SUMARIO: I. ESPECIFICIDAD DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL JURISTA.—II. UN ESTUDIO QUE SE EMPIEZA DE CERO.—III. UN ESTUDIO QUE SE HACE EN UN IDIOMA EXTRANJERO.—IV. UN ESTUDIO QUE EXIGE UNA LÓGICA ESPECÍFICA.—V. UN ESTUDIO EN EL QUE EL «COMPONENTE SOCIAL» DE LA INTELIGENCIA ES MUY ALTO.—VI. RECAPITULACIÓN PROVISIONAL Y TRANSICIÓN.—VII. EL LUGAR DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN LOS ESTUDIOS DE DERECHO.—IX. LA FUNCIÓN DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA FORMACIÓN DEL JURISTA.

I. ESPECIFICIDAD DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL JURISTA

«Todas las familias felices se parecen unas a otras, cada familia desdichada lo es a su manera.» Estas palabras, con las que Leon Tolstoi abre *Ana Karerina*, me parece que son particularmente apropiadas para hacer una primera aproximación a los estudios universitarios, ya que en ellos se produce una singular combinación del destino de las familias felices y desdichadas. Todos los estudios universitarios, como las familias felices, se parecen unos a otros, en la medida en que todos son difíciles. Pero cada uno comparte el destino de las familias desdichadas, en la medida en que cada uno lo es a su manera.

No hay estudio universitario que no sea difícil. Y no hay tampoco clasificación o *ranking* alguno de dificultad. La idea de que hay estudios universitarios más difíciles que otros carece de cualquier fundamento. Hacer ciencia es exactamente igual de difícil en cualquier área del saber. Todas, sin excepción, ponen a prueba la capacidad del ser humano hasta un límite que es, además, inalcanzable individualmente.

El ciudadano que, recién estrenada por lo general su mayoría de edad, se matricula en una Facultad de Derecho, no se encuentra, por tanto, en una situación ni mejor ni peor que aquella en que se encuentran sus demás compañeros

de COU y «selectividad», que se han matriculado en cualquiera de las otras Facultades universitarias. Aunque subjetivamente pueda tener la sensación de que el estudio del Derecho es particularmente difícil, debe saber que no es así. Se encuentra ante un reto que es exactamente igual de difícil que aquél ante el que se encuentran los demás. Únicamente la manera de ser difícil es lo que varía. Pues el Derecho, como las demás ciencias, es difícil *a su manera*.

¿Cuál es esa manera? ¿Qué es lo que distingue la dificultad de estudiar Derecho de la dificultad de estudiar cualquier otra ciencia? Sobre esto es sobre lo que al aprendiz de jurista le conviene reflexionar, porque es mucho el provecho que puede obtener de dicha reflexión. Si empieza por entender la manera específica de ser difícil del estudio del Derecho, habrá iniciado con buen pie su proceso de aprendizaje.

Dicha dificultad procede de la confluencia de cuatro circunstancias:

- 1.^a Es un estudio que se empieza de cero.
- 2.^a Es un estudio que se hace en un idioma «extranjero».
- 3.^a Es un estudio que exige una «lógica» específica.
- 4.^a Es un estudio en el que el «componente social» de la inteligencia es muy alto.

La combinación de estas cuatro circunstancias es lo que suele desorientar, y en algunos casos hace desesperar, al estudiante en el primer año de la licenciatura, como todo el que ha tenido que hacerlo sabe por experiencia. Experiencia, por lo demás, que todos los que enseñamos en ese primer año renovamos con cada nueva promoción de estudiantes. Pues no es algo que afecte a unos alumnos y no a otros, sino que es una dificultad general, que afecta a todos.

Justamente por eso, es importante que el alumno reflexione sobre ellas. En parte para hacer una primera aproximación al territorio que va a empezar a transitar y en el que va a tener que moverse profesionalmente cuando finalice sus estudios universitarios. En parte para intentar entender lo que inevitablemente le va a pasar en el inicio de su proceso de formación como jurista. Pues no hay mejor método para poder superar un obstáculo, que anticiparse a él y procurar saber en qué consiste. De ahí la conveniencia de decir algo sobre cada una de tales circunstancias.

II. UN ESTUDIO QUE SE EMPIEZA DE CERO

Recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí en el colegio con seis años casi recién cumplidos, fue lo que en la clase de catecismo se nos enseñaba como las «obras de misericordia». Y recuerdo que entonces me llamó podero-

samente la atención que la primera de tales obras fuera «enseñar al que no sabe». Antes que «dar de comer al hambriento» o «dar de beber al sediento», etc. Muchos años después, desde que empecé a impartir docencia en el primer curso de la licenciatura de Derecho, siempre me viene a la memoria al empezar el curso ese «enseñar al que no sabe», cuya ubicación como primera de las obras de misericordia tanto me sorprendió de niño.

No pretendo, obviamente, con ello calificar la enseñanza del Derecho como una obra de misericordia. Nada más lejos de mi ánimo. Y, sin embargo, es algo que siempre me viene a la memoria, porque los profesores de primero de Derecho nos singularizamos entre los profesores universitarios por «enseñar al que no sabe». En esto nos diferenciamos prácticamente de todos los demás. De los profesores de otras Facultades universitarias, porque ellos, por lo general, enseñan a alumnos que ya saben algo de aquello (matemáticas, lengua, física, historia...), que ahora se les continúa enseñando de otra manera. De los demás profesores de la Facultad de Derecho, porque el alumno ya sabe algo en el momento en que ellos inician su tarea. Los únicos que enseñamos a quienes no saben radicalmente nada de aquello que van a empezar a estudiar somos los profesores de primero de Derecho, ya que el alumno no ha tenido contacto de ningún tipo con el mundo del Derecho en los niveles preuniversitarios de enseñanza y empieza, en consecuencia, su estudio de cero.

Ello supone un reto para el profesor, pero, sobre todo, supone un reto para el alumno, que es lo único que aquí interesa. Este artículo no tiene por finalidad informar de los problemas del profesor, sino anticipar cuáles son los problemas con los que se va a encontrar el alumno en su iniciación en el proceso de aprendizaje del oficio de jurista. Y éste es uno de ellos. En el estudio del Derecho no hay continuidad alguna entre los niveles previos de enseñanza y el nivel superior. Tampoco hay ruptura. Hay, sencillamente, discontinuidad. El estudiante ha obtenido en los niveles preuniversitarios una formación suficiente para acceder a la Universidad y para matricularse, por tanto, en una Facultad de Derecho. Pero nada hay en su certificación académica preuniversitaria que apunte en esa dirección. En esto el aprendiz de jurista sí se diferencia de sus demás compañeros universitarios.

En contra de lo que al estudiante le pueda parecer, esta ausencia de información previa no es negativa. El no haber tenido acceso al mundo del Derecho en la enseñanza básica y media es lo mejor que puede haberle pasado como estudiante en esos niveles de enseñanza y lo mejor también desde la perspectiva actual de su proceso de aprendizaje del oficio de jurista.

Y es lo mejor, porque más vale empezar de cero que tener que empezar desandando el camino que inevitablemente se habría tenido que hacer mal, si se hubiera pretendido iniciarlo en la enseñanza preuniversitaria. Por razones

que iremos viendo a lo largo de la exposición, partir de cero en una Facultad de Derecho es la vía más apropiada para formarse como jurista. Cualquier otra alternativa es peor.

Por eso en ningún país se procede en este terreno de forma distinta a como lo hacemos en España. Derecho es, en este sentido, un estudio *exclusivamente* universitario en todas partes. Y debe continuar siéndolo.

Ahora bien, el hecho de que sea así y de que deba ser así, no quiere decir que esta circunstancia no sea un obstáculo que el alumno se encuentra en el camino. «Todo comienzo es difícil.» Con estas palabras inició Karl Marx el prólogo a la primera edición de *El Capital*. Y con ello tiene que contar de la manera más radical el aprendiz de jurista. Por eso no tiene nada de extraño que en el primer año se sienta perdido y que no le resulte fácil orientarse. Una cierta desorientación es prácticamente inevitable en el proceso inicial de formación del jurista. El Derecho es y debe ser un instrumento de seguridad para la sociedad. Y la función del jurista es contribuir a dar seguridad a la sociedad a través del conocimiento e interpretación del ordenamiento como forma de dar respuesta pacíficamente a los conflictos que se producen en las relaciones sociales. Sin embargo, en el origen hay una inseguridad radical, que es constitutiva, que no puede no darse. Con ella tiene que aprender a convivir el estudiante. Es una inseguridad que no desaparece nunca del todo, porque no hay nadie que pueda dominar por completo todo el ordenamiento. Pero es una inseguridad que va siendo sustituida, lenta pero eficazmente, a través del proceso de aprendizaje, por un conocimiento *razonablemente seguro* del Derecho como instrumento de ordenación general de la sociedad y de eventual resolución de los conflictos que en ella se producen.

En la fase inicial es, en consecuencia, muy importante que el alumno tenga no fe, que ni se puede ni se debe pedir a nadie en el terreno científico, pero sí una confianza razonable en la enseñanza que recibe. Muchas de las cosas que estudia en el primer curso de la licenciatura ni sabe ni puede saber todavía de qué le van a servir. La verificación de su utilidad sólo la va a tener más adelante. Pero si no las sigue en el orden establecido, difícilmente podrá llegar a alcanzar esa *razonable seguridad*, que debe ser el resultado de su proceso de formación como jurista.

III. UN ESTUDIO QUE SE HACE EN UN IDIOMA EXTRANJERO

Se trata, obviamente, de una exageración. El aprendizaje del Derecho se hace en castellano o en alguna de «las demás lenguas españolas» oficiales, junto con el castellano, en algunas Comunidades Autónomas (art. 3.2 CE). Pero, en

general, podemos dar por supuesto en un artículo como este, que se hace en castellano. La argumentación, en todo caso, sirve para cualquier lengua.

Se enseña y se aprende, pues, en castellano y debe hacerse en buen castellano. La señal inequívoca de un buen jurista es que sabe expresarse no sólo con corrección, sino incluso con elegancia en su propio idioma. Se trata de una regla que es posible que tenga alguna excepción, pero no la conozco. Nunca he leído un buen libro o un buen artículo sobre un tema jurídico, que no estuviera además bien escrito. Esto es algo a lo que el alumno debe prestar particular atención desde el principio.

Ahora bien, el castellano en que el aprendiz de jurista tiene que empezar a estudiar es un castellano muy rico y especializado. Y no por capricho, sino por necesidad. El Derecho es simultáneamente una ciencia y una ingeniería social y el jurista tiene que contemplar, en consecuencia, su objeto de estudio de la misma manera que el científico y el ingeniero contemplan la naturaleza: de una manera científica y técnica. La diferencia entre unos y otros radica en que, mientras el científico y el ingeniero disponen de instrumentos cada vez más sofisticados para analizar su objeto de estudio, el jurista no dispone nada más que de la palabra. Toda la precisión que el científico y el ingeniero alcanzan en el conocimiento de la naturaleza a través de instrumentos cada vez más complejos, el jurista la tiene que alcanzar en el conocimiento de la sociedad a través de conceptos cada vez más diversificados. La palabra es para el jurista el equivalente de los instrumentos de investigación de los científicos e ingenieros. Si avanzar en el estudio de la naturaleza exige la utilización de instrumentos de investigación cada vez más perfectos y sofisticados, así también ocurre en el estudio de la sociedad. Por eso la formalización jurídica de las relaciones sociales constituye una expresión extraordinariamente compleja, que no deja además de progresar en complejidad nunca, ya que cuanto más se desarrolla una sociedad más se diversifican las relaciones entre los individuos. De ahí que el objeto de estudio del jurista no tenga otra forma de expresarse que a través de un sistema de conceptos cada vez más amplio, más diversificado y más preciso.

A esto es a lo que me refiero con que el Derecho se estudia en un idioma extranjero. El castellano jurídico es castellano, pero jurídico. Importante es el sustantivo, pero también el adjetivo. Quien no sepa bien castellano, no puede ser buen jurista. Y el que lo sabe, tiene mucho adelantado para serlo. Pero saber bien castellano no basta. Es condición necesaria, pero no suficiente. El jurista tiene además que dominar el lenguaje jurídico. Tiene que acabar moviéndose con comodidad y fluidez en dicho lenguaje, si quiere ejercer su oficio con solvencia. Hacer uso del vocabulario jurídico con precisión es lo que denota la presencia de un buen jurista, lo que diferencia ante todo al buen jurista del que no lo es.

Aquí es donde reside en buena medida la dificultad del estudio del Derecho. No se necesitan ni reactivos químicos, ni microscopios, ni aceleradores de partículas, ni nada. Solamente la palabra. Pero con la palabra hay que alcanzar la misma precisión que con los reactivos químicos, con el microscopio o con los aceleradores de partículas. Este es el reto ante el que se encuentra el jurista y de ahí que en aprender a hacer uso correctamente de la palabra consista buena parte de su proceso de aprendizaje.

Justamente por eso, porque el aprendizaje del Derecho es el aprendizaje de un idioma extranjero, es por lo que las técnicas de enseñanza y estudio se asemejan bastante a las técnicas de enseñanza y estudio de un idioma extranjero. A los alumnos de Sevilla les digo siempre el primer día de clase que la técnica popularizada por *ASSIMIL* para la enseñanza de un idioma extranjero la inventaron realmente las Facultades de Derecho. En las Facultades de Derecho, mucho antes que en *ASSIMIL*, los profesores se han dirigido a los alumnos haciendo uso de unos términos que éstos no saben lo que significan. El profesor no puede detenerse a explicar qué es lo que quiere decir con cada uno de ellos. El consumo de tiempo sería brutal y el bloqueo que se produciría en la fase inicial del aprendizaje resultaría insuperable. El alumno, en consecuencia, tiene que empezar a aprender en unos términos que no entiende muy bien y de los que sólo más adelante acabará haciendo uso de una manera precisa y eficaz. Exactamente igual que le ocurre cuando aprende un idioma extranjero. Y exactamente igual le ocurre con la adquisición de conocimientos pasivos y activos. De la misma manera que el alumno de un idioma extranjero tiene menos dificultad en leer y entender que en hablar y escribir en dicho idioma, así también le ocurre al aprendiz de jurista. Conocimiento pasivo del vocabulario jurídico empieza a adquirir de forma relativamente rápida. Conocimiento activo tarda mucho más. En realidad, es un proceso que no acaba nunca, pero en el que se puede alcanzar también una razonable seguridad y fluidez.

Mi experiencia como estudiante, pero, sobre todo, como profesor durante más de veinte años en primero de Derecho, me indica que este es un obstáculo que al alumno le cuesta mucho superar. El castellano jurídico debe acabar siendo *su lengua materna*, pero es para él en este momento un idioma extranjero. En que deje de ser esto último para convertirse en lo primero, es en lo que debe consistir buena parte de su aprendizaje en los años que va a pasar en la Facultad de Derecho.

IV. UN ESTUDIO QUE EXIGE UNA LOGICA ESPECIFICA

El aprendiz de jurista tiene que empezar a estudiar no sólo de cero y en un idioma extranjero, sino que además tiene que aprender simultáneamente a ra-

zonar de una manera para la que tampoco ha sido preparado específicamente en sus estudios anteriores. También en esto hay discontinuidad. Entre la forma de razonar y argumentar de la que ha aprendido a hacer uso en los niveles pre-universitarios de enseñanza y aquella de la que tiene que aprender a hacer uso en el mundo del Derecho hay una frontera, esto es, contacto, pero también separación. Si no hubiera contacto, sería imposible iniciar un estudio universitario, aunque sea tan peculiar como es el estudio del Derecho. Pero si no hubiera separación, jamás se podría preparar al aprendiz de jurista para la que tiene que ser su función específica en la sociedad, que no es otra que hacer valer la justicia en las relaciones entre los individuos.

La necesidad de una lógica específica, distinta de aquella de la que se hace uso en cualquiera de las otras áreas del saber, viene exigida no sólo por la propia naturaleza de su objeto de estudio, sino además, y sobre todo, por la finalidad del mismo en la convivencia humana. El Derecho es un instrumento para hacer valer la justicia en las relaciones sociales, esto es, para «dar a cada uno lo suyo».

La experiencia enseña que no es infrecuente que surjan conflictos sobre qué es lo de cada uno y por eso es necesario el Derecho. El Derecho no es el conflicto, pero sí es el resultado del conflicto. Si los hombres, como escribió Madison en *El Federalista*, fueran ángeles y no hubiera enfrentamientos entre ellos, el Derecho no existiría. Habría «paz sin sujeción», como dijo Hobbes en el *Leviathan*. El Derecho es, por tanto, y al mismo tiempo, el resultado de un profundo conocimiento y de una profunda desconfianza en la condición humana. No se trata de algo natural y espontáneo, sino de todo lo contrario. Es lo más antinatural y antiespontáneo que existe en las sociedades humanas. Es un artificio diseñado por la sociedad para neutralizar impulsos naturales («el ansia de poder y más poder que sólo cesa con la muerte», del que hablaba Hobbes), que conducen a enfrentamientos de unos contra otros. Natural es, pues, la aspiración humana a la justicia. Pero artificial el instrumento a través del cual se hace efectiva en la vida en sociedad.

El Derecho intenta conseguir este objetivo a través de dos vías: una preventiva y no conflictiva y otra represiva o contenciosa. Ambas giran en torno al conflicto. La primera, para evitar que se produzca. La segunda, dando una respuesta civilizada al mismo, una vez que se ha producido.

La primera es mucho más importante que la segunda. En una sociedad normalizada, entre el 95 y el 97 por 100 de los comportamientos humanos se adecúan a lo que disponen las normas, que son, en consecuencia, cumplidas por los ciudadanos sin que se produzcan conflictos en su aplicación. Únicamente entre el 3 y el 5 por 100 de las conductas suscitan conflictos para los que la sociedad tiene que disponer de un mecanismo de imposición coactiva del cumplimiento de la norma.

La función del jurista es tan importante en el 95-97 por 100 pacífico como en el 3-5 por 100 conflictivo. Que las normas estén bien hechas y que los ciudadanos, en caso de duda, reciban un buen asesoramiento, es lo que evita que se produzcan conflictos o que, caso de producirse, puedan ser neutralizados en su fase inicial. Y en esta tarea el papel del jurista es esencial. Pero es claro que la función del jurista resulta mucho más visible en caso de conflicto, cuando se produce una disputa en relación con qué es lo de cada uno. Su función es la misma en uno y otro caso y su forma de aproximarse a la realidad y estudiarla no es distinta. No hay una lógica jurídica para el estudio de las relaciones pacíficas y otra para el estudio de las relaciones conflictivas. La lógica jurídica es la misma para ambas. Lo que sí ocurre es que en el conflicto es donde la necesidad e imprescindibilidad de la misma se manifiesta en toda su intensidad.

Y es así, porque el *conflicto es la excepción que confirma la norma*. Cuando una norma no necesita ser confirmada, su presencia apenas si se nota. Lo que no quiere decir que no sea norma, que no opere como tal y que no cumpla las funciones que en cuanto norma tiene asignadas. Es lo que ocurre con la inmensa mayoría de las normas que integran el ordenamiento, cuya aplicación no es conflictiva. Es, sin embargo, en el conflicto que surge en su aplicación en el que la norma se confirma como tal y en el que se hace visible la necesidad de la lógica jurídica para dar una solución pacífica y, por tanto, civilizada al mismo. El conflicto no es, pues, el Derecho, pero es esencial en el mundo del Derecho y en la formación del jurista.

No puede ser de otra manera. En el conflicto jurídicamente ordenado es mucho lo que está en juego tanto para el ciudadano individualmente considerado como para la comunidad de la que forma parte.

Para el ciudadano el conflicto jurídicamente ordenado, en especial si acaba siendo residenciado ante un Tribunal de Justicia, puede ser uno de los momentos que más consecuencias acabe teniendo para su vida en sociedad. La diferencia entre la libertad y la cárcel, entre la dignidad y la ruina, puede depender de cómo se resuelva un conflicto en el que se ve envuelto. Puede depender, en consecuencia, de la forma en que su abogado haya argumentado su conducta o de la manera en que dicha argumentación sea entendida por el juez o Tribunal que ha de dictar sentencia. Y ello es así tanto en un proceso penal, que es el que más terror suele inspirar, como en un proceso civil (o laboral, o administrativo), cuyas consecuencias no es infrecuente que sean para un ciudadano tan importantes o más que las de muchos procesos penales.

Pero no sólo para el ciudadano individualmente considerado es importante el conflicto y su eventual solución por vía judicial. También lo es para la comunidad de la que forma parte. Pues en todo proceso, sea de la naturaleza que sea, hay siempre y de manera insoslayable una dimensión moral y hay, por

tanto, siempre el riesgo de que se cometa una injusticia, que no tiene simplemente alcance privado. La decisión judicial de un conflicto no se mide simplemente en dinero o libertad. La decisión de un conflicto supone al mismo tiempo la decisión de la sociedad sobre el comportamiento de uno o varios de sus miembros. La sociedad a través del juez decide quién ha ignorado o no sus propias responsabilidades. Si este juicio no es imparcial y limpio, entonces la comunidad inflige a uno de sus miembros un daño moral y lo sella, en cierta medida, con el estigma de quien se ha puesto con su conducta fuera de la ley. El daño más grave se produce cuando un ciudadano inocente es condenado como autor de un delito, pero es también muy grave en cualquier tipo de proceso.

En esta doble dimensión, individual y colectiva, radica la importancia del conflicto y del mecanismo de resolución de los mismos para la calificación moral de una sociedad. Pues la forma en que una sociedad da solución jurídicamente a sus conflictos es el canon que permite calificar a una sociedad de más o menos justa-injusta. Precisamente por eso, el papel del jurista en la sociedad es de una importancia capital.

Para hacer frente a una eventualidad de este tipo es para la que el aprendiz de jurista tiene que prepararse. Ello no quiere decir, repito, que la enseñanza y el estudio del Derecho sea única y exclusivamente la enseñanza del conflicto. Pero el conflicto es un momento de capital importancia, en la medida en que es el momento en que la norma tiene que afirmarse frente al ataque, frente a la conducta que pretende imponerse como excepción. El conflicto es en cierta medida *la hora de la verdad* de la norma. Y para preparar al jurista no sólo para esa hora de la verdad, pero sí específicamente para esa hora de la verdad, es para lo que tiene que estar diseñado el estudio en una Facultad de Derecho.

¿Qué exigencias se derivan para la enseñanza del Derecho de esta función del jurista en general en la sociedad y de su eventual participación en la solución de un conflicto? ¿Por qué tienen que traducirse en una forma de razonar y argumentar específica?

Para dar respuesta a estos interrogantes hay que volver sobre algo que se ha dicho en este mismo apartado. El Derecho es un producto de la desconfianza en la condición humana. En la misma premisa descansa la vía jurídicamente ordenada para la solución de los conflictos y debe descansar la enseñanza del Derecho. Sólo que en este caso la desconfianza ya no es una desconfianza genérica en la condición humana, sino una desconfianza específica en la condición humana de quienes han de participar en la eventual solución de los mismos, bien sea como abogados bien sea como jueces. La sociedad no tiene que desconfiar de los jueces y abogados menos que de los ciudadanos, sino más, pues, a fin de cuentas, éstos no disponen del privilegio de que gozan aquéllos de participar decisivamente en la tarea de administrar justicia.

Dicho en otras palabras: si el Derecho en cuanto instrumento de ordenación general de las relaciones sociales descansa en la desconfianza en todos los seres humanos sin excepción, el Derecho en cuanto instrumento de resolución de los conflictos descansa en la desconfianza de aquellos seres humanos a los que la sociedad confía la tarea de administrar justicia. Es un plus de desconfianza en la condición humana de determinados ciudadanos lo que caracteriza a la vía jurídicamente ordenada de resolución de los conflictos.

Y es así y tiene que ser así, porque la condición humana del juez o del abogado no es distinta de la de los demás ciudadanos. Ni mejor ni peor. Y, sin embargo, en ellos deposita la sociedad una tarea de capital importancia, de la que depende su convivencia civilizada. Si desempeñan bien su oficio, es mucho lo que la sociedad en general y los ciudadanos en particular ganan. Si lo hacen mal, el coste puede ser terrible. Es lógico que la sociedad no pueda arriesgarse a confiar en que lo hagan bien, sino que deba poner los medios para intentar impedir que no lo hagan bien.

En esta idea es en la que se inspira la ordenación jurídica del mecanismo de resolución de conflictos. La sociedad tiene que dotarse de garantías frente a la subjetividad de quienes participan en el proceso de hacer valer la justicia en las relaciones humanas. Tiene que intentar impedir que puedan hacer uso de ese mecanismo de manera desviada. A esto es a lo que obedece la formalización jurídica general de las relaciones sociales, a fin de disponer de puntos de referencia objetivos en caso de que surja un conflicto. Y a esto es a lo que obedece también la regulación pormenorizada y extraordinariamente formalizada de la manera en que se obtiene información, se la procesa y se la traduce en una decisión en la resolución de un conflicto, en particular por vía judicial.

El Derecho, tanto el sustantivo como el procesal, es un mecanismo de objetivación de las relaciones humanas, a fin de reducir la subjetividad y, por tanto, la arbitrariedad en dichas relaciones en general y en la solución de los conflictos en particular. La subjetividad es en el mundo del Derecho el mal del que hay que huir como de la peste.

Esta idea tiene que presidir todo el proceso de formación del jurista. El estudiante tiene que aprender (hay que enseñarle, por tanto) a razonar a contracorriente, a desconfiar de sí mismo y a rechazar la solución del problema a la que espontáneamente tiende. Y hay que enseñarle, sobre todo, a despersonalizar la argumentación. Justamente porque lo que está en juego son problemas personales, de carne y hueso, que tienen que ser resueltos también por personas de carne y hueso, que no disponen nada más que de la palabra, es por lo que la argumentación jurídica tiene que ser lo más objetiva y despersonalizada posible en la solución de los mismos. El carácter objetivo e interpersonal del conocimiento científico característico de las ciencias de la naturaleza se tiene que

intentar conseguir también en el mundo del Derecho. Únicamente aquello que puede ser justificado en términos objetivos debe valer como razonamiento jurídico.

Se trata, por tanto, de un aprendizaje antinatural, que puede llegar incluso a ser de una artificiosidad extrema, que se distingue tanto del que ha ido haciendo en los estudios preuniversitarios como del que hacen los demás estudiantes en los otros estudios universitarios. Por eso no es anómalo que se produzca un desencuentro entre la idea de justicia que puede formarse espontáneamente en la sociedad respecto de un determinado asunto y la que se alcanza técnicamente, en particular a través de la vía procesal correspondiente. Aunque al ciudadano le resulte extraño y le cueste trabajo entenderlo, el juego conjunto de las normas sustantivas y procesales, que a veces puede no entender, no es un instrumento que juegue a favor de abogados y jueces, sino al contrario, es una garantía de la sociedad frente a quienes participan en la Administración de Justicia. No da poder a los jueces y abogados, sino que, al contrario, limita el poder que la sociedad les concede. Con él se pretende alcanzar lo que razonablemente se puede alcanzar en las sociedades humanas, que no es hacer realidad el «ideal» de justicia que puedan tener espontáneamente los ciudadanos sobre los más diversos asuntos, sino expresar el «estándar social» correspondiente a «la altura de los tiempos», esto es, al momento histórico alcanzado por la convivencia ciudadana en cada país. Una Administración de Justicia que tradujera la idea espontánea de justicia que pudiera formarse en la sociedad respecto de los diferentes conflictos, conduciría a la arbitrariedad más espantosa y a la inseguridad permanente.

Aprender a pensar, a razonar, a argumentar de esta manera antinatural, artificial, es lo que tiene que hacer el estudiante en la Facultad y a lo que tiene que estar dedicada la enseñanza. De que lo consiga va a depender que sea capaz de ejercer el oficio de jurista y de responder, en consecuencia, a la confianza que la sociedad deposita en él en cuanto participante privilegiado en el proceso de administración de justicia. Se trata, sin duda, de la mayor dificultad en el proceso de formación del jurista.

V. UN ESTUDIO EN EL QUE EL «COMPONENTE SOCIAL» DE LA INTELIGENCIA ES MUY ALTO

En el Derecho no interesa nada más que la dimensión social del ser humano. Es verdad que interesa con la finalidad de hacer realidad su aspiración natural a la justicia. Pero lo que importa en el proceso de enseñanza y aprendizaje es únicamente el artificio social a través del cual se da respuesta a esa as-

piración. El Derecho es, por tanto, en este sentido, un conocimiento instrumental y no sustantivo. Lo ideal sería que el instrumento no hiciera falta, que el Derecho no existiera y que no hubiera, en consecuencia, que enseñarlo y aprenderlo. Una sociedad utópica sería una sociedad sin Derecho, una sociedad en la que la aspiración natural a la justicia se haría realidad de forma espontánea, sin necesidad de artificio de ningún tipo.

La dimensión social y artificial es, pues, lo determinante en el mundo del Derecho. Esto es lo que impide, por una parte, que su estudio pueda iniciarse en la infancia y adolescencia y, por tanto, en los niveles preuniversitarios, y lo que exige, por otra, la invención de un vocabulario muy rico y especializado, del que se tiene que hacer uso a través de una forma de razonar específica, que se diferencia no sólo de la forma de razonar espontánea no científica, sino también de la forma de razonar en las demás ciencias, sean de la naturaleza o de la sociedad. En la combinación de estas tres circunstancias radica la especificidad del proceso de aprendizaje del jurista, *la manera de ser difícil* del estudio del Derecho.

Pero todavía hay una cuarta, que también hunde sus raíces en la dimensión social del Derecho. Es la que describo con la expresión «componente social de la inteligencia», que, como indico en el epígrafe de este apartado, es muy alto.

En realidad, en todo estudio hay siempre un componente social de la inteligencia, ya que todo proceso de aprendizaje se hace en sociedad y el individuo no puede no verse afectado por ello. Pero el peso de ese componente social de la inteligencia en unos estudios y otros varía y la diferencia puede ser extraordinariamente grande. Hay estudios en los que el componente social de la inteligencia es muy bajo y otros en los que es muy alto.

Los dos extremos son el ajedrez y el Derecho. El ajedrez no es un estudio universitario, pero no creo que nadie pueda discutir seriamente que el reto que supone para la inteligencia humana es comparable al que representa cualquier estudio universitario. Vale, por tanto, como punto de comparación.

Y vale, porque en el ajedrez el componente social de la inteligencia es prácticamente nulo. Precisamente por eso no es un estudio universitario. Pero también por eso el ajedrecista empieza a ser un buen ajedrecista de niño, suele ser muy bueno de adolescente y alcanza, en todo caso, su punto culminante como jugador profesional a una edad muy temprana. Alrededor de los treinta años el ajedrecista alcanza su máximo nivel, a partir del cual empieza el declive.

En el Derecho ocurre todo lo contrario. El Derecho es puro artificio social y por eso el componente social de la inteligencia es muy alto. Esta es la razón por la que un niño o un adolescente no es que no pueda ser un buen jurista, sino que sería una aberración que la sociedad intentara siquiera que pudiera serlo.

Ni siquiera en los primeros años como adulto se aproxima el jurista a su máximo nivel. Por lo general, el momento en que empieza el descenso en la capacidad del ajedrecista coincide con el momento en que empieza la afirmación de la capacidad del jurista.

No por casualidad. El Derecho es la máxima expresión de la complejidad social. En realidad, esta afirmación no es del todo exacta. La Política lo es todavía más. Pero la Política no es ciencia ni, en consecuencia, estudio universitario. La Política es el reino de la inseguridad y es, por tanto, radicalmente *a-científica*. La Política es arte, es científicamente inaprensible e inclasificable. Entre las cosas que pueden ser estudiadas científicamente el Derecho es la máxima expresión de la complejidad social. Y por eso en su estudio el componente social de la inteligencia es muy alto.

Esta es una dificultad que se añade a las otras ya mencionadas. El estudiante tiene cuando ingresa en la Facultad de Derecho una experiencia social muy limitada y, sin embargo, tiene que estudiar un ordenamiento que sintetiza una experiencia social muy amplia. El ordenamiento es fundamentalmente la expresión de relaciones sociales entre adultos, definidas normativamente por adultos y perfeccionadas además constantemente a través de la diversificación de dichas relaciones sociales como consecuencia de conductas protagonizadas también fundamentalmente por adultos. Recién acabada la adolescencia, el estudiante tiene que empezar a entender, pues, la expresión más compleja del mundo de los adultos, en el que él acaba de entrar. Tiene que reflexionar sobre relaciones sociales sobre las que no tiene ninguna experiencia personal. Creo que se comprenderá fácilmente por qué tiene dificultad en entender el sentido general del ordenamiento, así como el interés al que responde cada una de las normas que se integran en el mismo.

La simultaneidad del altísimo componente social de la inteligencia en el mundo del Derecho y de la carencia de experiencia social por parte del estudiante está en el origen de buena parte de las «crisis vocacionales» que se producen en la fase inicial del proceso de aprendizaje. Puesto que se trata de una circunstancia que es independiente de la voluntad de los individuos, no hay más remedio que aprender a convivir con ella. Afortunadamente es una crisis que se cura con la edad. Es uno de los pocos terrenos en los que el carnet de identidad, en lugar de ser una fuente de problemas, es la premisa para la solución de los mismos.

La combinación de estas cuatro circunstancias es lo que define la manera de ser difícil del estudio del Derecho y lo que la diferencia de la manera de ser difícil de los demás estudios universitarios. Se trata de una dificultad que se acentúa en la fase inicial del aprendizaje. Y tal vez por eso el aprendiz de jurista tenga la impresión de que su materia es particularmente difícil. No es

verdad. Las apariencias engañan. Es el ritmo de aprendizaje el que es distinto. En el Derecho es más lento que en las ciencias de la naturaleza sin duda, pero también que en las demás ciencias sociales. Pero esa lentitud inicial tiene sus compensaciones después. Profesionalmente los años son un enemigo menos terrible para el jurista que para los demás. Y es que en este mundo no hay nada gratis. O se paga más a la entrada o se paga más a la salida. Pero pagar hay que pagar por igual.

VI. RECAPITULACION PROVISIONAL Y TRANSICION

Ya sabemos, pues, en qué consiste la manera específica de ser difícil del estudio del Derecho. Sabemos también que se trata de una dificultad objetiva y, por tanto, insoslayable. No hay nada ni nadie que pueda evitar que el aprendiz de jurista tenga que pasar por esta experiencia.

Ahora bien, el hecho de que no sea posible evitarlo, no quiere decir que dé igual la forma en que se pase por ella. El estudiante tiene que pasar por esa experiencia, pero hay que tratar de evitar que la experiencia se convierta en un trance. Y hay que poner los medios para ello. Los costes del proceso de aprendizaje deben reducirse lo más posible. Es a lo que debe tender la planificación general de los estudios en la Facultad de Derecho, así como los de cada una de las disciplinas en particular.

Puesto que mi experiencia docente ha sido y es la de profesor de Derecho Constitucional, la reflexión que sigue está destinada exclusivamente a explicar *el lugar* que ocupa y *la función* que cumple el Derecho Constitucional en la formación del jurista, así como las consecuencias que de ello se desprenden para su enseñanza. Si hasta este momento hemos hablado del estudio del Derecho en general, ahora hemos de pasar ya al territorio propio del Derecho Constitucional, para ver cómo desde él se puede hacer frente a las dificultades que acabamos de reseñar. Lo que ocurre es que, como vamos a ver, esa reflexión desborda inevitablemente los límites estrictos de la disciplina y se proyecta sobre el estudio de las demás disciplinas jurídicas sin excepción. Pero no anticipemos conclusiones y vayamos por orden.

VII. EL LUGAR DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN LOS ESTUDIOS DE DERECHO

¿Por qué se estudia Derecho Constitucional en el primer curso de la licenciatura? ¿Por qué se ha hecho así siempre desde las Revoluciones americana y

francesa y por qué se hace así en todas partes? ¿A qué se debe que el estudio del ordenamiento se empiece siempre por el Derecho Constitucional? ¿Por qué el Derecho Constitucional tiene que constituir el punto de partida para el estudio de los demás Derechos (civil, penal, administrativo, etc.)?

Para quien ha cursado ya estudios en una Facultad de Derecho, aunque no haya pasado del primer curso de la licenciatura, dar una respuesta a estos interrogantes resulta relativamente fácil. Pero ese no es nuestro caso. Puesto que los destinatarios de mi reflexión son los alumnos recién matriculados por primera vez en una Facultad de Derecho, y dichos alumnos, como se ha visto, «no saben todavía nada», es claro que la respuesta a dichos interrogantes no se puede obtener recurriendo a conocimientos que se tendrán que ir adquiriendo precisamente a partir de este momento.

Estas son las condiciones en que el problema está planteado. El alumno no sabe nada y no se le pueden anticipar tampoco conocimientos que tiene que ir adquiriendo ordenadamente a partir de ahora a través del estudio de las diversas disciplinas incluidas en el primer curso de la licenciatura, entre ella el Derecho Constitucional. Y en estas condiciones hay que resolverlo.

A lo único que podemos recurrir, pues, es a lo que el alumno ya sabe: las cuatro circunstancias que acabamos de examinar en la primera parte de este artículo. Es lo único que el estudiante sabe y debe saber. A partir de aquí hay que articular la respuesta. Lo que quiere decir que los interrogantes con los que se iniciaba este apartado podrían ser reformulados en los siguientes términos: ¿Por qué hay que empezar a hacer frente a las circunstancias que dificultan el aprendizaje del Derecho a partir del Derecho Constitucional? Esta es la primera cuestión a la que el profesor de Derecho Constitucional tiene que enfrentarse y para la que debe tener una respuesta. Y una respuesta que le resulte comprensible a quienes no saben nada. El profesor tiene que tener una respuesta convincente sobre el lugar y la función del Derecho Constitucional en el estudio del Derecho y, por tanto, en la formación del jurista. Y debe dársela a conocer a los alumnos antes de empezar la explicación de la asignatura. A exponer la que considero adecuada, es a lo que está dedicado el resto de la exposición.

IX. LA FUNCION DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN LA FORMACION DEL JURISTA

Empecemos por donde hay que empezar, por lo evidente, por lo que saben incluso los que «no saben nada de Derecho»: el Derecho es un instrumento para ordenar las relaciones de los individuos en sociedad. El Derecho tiene, en

consecuencia, que seguir a los individuos por todos los caminos que transitan en su vida en sociedad. Tanto si el camino es una autopista como si es una carretera secundaria o incluso un sendero sin asfaltar en medio del campo. Allí donde va un individuo y establece relaciones con otros individuos, allí va el Derecho.

El Derecho sigue, por tanto, el curso de la vida social de los individuos: desde que nacen (e incluso antes, desde la concepción, ya que el concebido y no nacido también es contemplado por el Derecho), hasta que mueren (e incluso más allá de la muerte, ya que el testamento es una manifestación de voluntad destinada a surtir efectos después de la muerte del testador). Entre ese antes del nacimiento y ese después de la muerte el Derecho tiene que seguir a los individuos allí donde vayan, por todas partes. Cuando van a la escuela o a la Universidad, cuando se casan y tienen hijos, cuando compran y venden, cuando trabajan por cuenta propia o por cuenta ajena, cuando lo hacen para un empresario privado o para alguna de las Administraciones públicas, cuando constituyen una sociedad del tipo que sea, cuando libran o aceptan una letra de cambio, cuando pagan el impuesto sobre la renta o el IVA, etc. Quiero decir con ello que el Derecho contempla siempre a los individuos en situaciones jurídicas particulares, en todas aquellas a través de las cuales se constituye la trama de la sociedad. *Por eso, para los ciudadanos, el Derecho no existe.* Existe el Derecho civil, el Derecho penal, el Derecho administrativo, el Derecho mercantil, etc. El punto de partida del Derecho, de todos estos Derechos, son los individuos, pero los individuos contemplados siempre en lo que tienen de diferente unos de otros. De lo contrario, no habría Derecho. Si todos los individuos hicieran lo mismo y produjeran lo mismo para proveer a su supervivencia, no habría intercambio y no habría, por tanto, sociedad. La vida humana en el planeta consistiría en la yuxtaposición de un determinado número de Robinsones. La sociedad descansa en el intercambio recíproco como forma de satisfacer las necesidades de cada uno y se basa, por tanto, en la diversificación de las conductas de los individuos. A dicha diversificación es a la que responde el Derecho, que, justamente por eso, sólo existe real y efectivamente de forma múltiple.

Únicamente hay un momento en el mundo del Derecho en el que se contempla a cada individuo no en lo que tiene de diferente, sino en lo que tiene de igual a todos los demás. Ese es el Derecho Constitucional. Para el Derecho Constitucional el individuo es *exclusivamente* ciudadano. Ni propietario rústico o urbano, ni jornalero o trabajador industrial o de servicios, ni accionista de una sociedad anónima o de responsabilidad limitada, ni concesionario de un servicio público o usuario del mismo. Para el Derecho Constitucional el individuo es simplemente ciudadano, esto es, titular de derechos fundamentales en

condiciones de igualdad. *El Derecho Constitucional es el único Derecho en el que el principio de igualdad tiene vigencia de forma pura*, sin matización de ningún tipo. En todos los demás Derechos los individuos son iguales en cuanto ciudadanos, pero diferentes en todo lo demás. Uno es padre y el otro es hijo, uno es propietario y el otro no lo es, uno es accionista mayoritario y el otro no, uno es comprador y el otro vendedor, uno es empresario y el otro trabajador y una infinidad de etcéteras. El Derecho Constitucional es el único Derecho que no contempla a los individuos en situaciones jurídicas particulares, sino en situaciones jurídicas generales, como ciudadanos, esto es, como titulares de derechos y obligaciones exclusivamente.

Por el momento esto es suficiente para que se tenga una primera aproximación a uno de los dos polos en los que se asienta el Derecho: los individuos y sus relaciones recíprocas a través de las cuales se constituye la sociedad. Ahora hemos de efectuar la misma maniobra de aproximación al otro polo indispensable para la existencia del Derecho: el representante político de los individuos, de la sociedad, el Estado. Pues el Derecho es el resultado de la combinación de ambos. Sin individuos que se relacionaran entre sí, el Derecho no existiría, no tendría ningún sentido. Robinson Crusoe no necesita el Derecho, ya que éste no es necesario nada más que para ordenar las relaciones sociales, evitar el conflicto o resolverlo pacíficamente. Pero, justamente por eso, sin un Estado, sin una instancia distinta de cada individuo, que creara las normas y que impusiera coactivamente el cumplimiento de las mismas en caso de que fuera necesario, el Derecho tampoco sería posible. Para que exista el Derecho son necesarios tanto los individuos que se relacionan entre sí, como el Estado en cuanto regulador de dichas relaciones, creador de las normas y garante de su vigencia. Puesto que ya nos hemos ocupado de los primeros, ahora nos toca hacerlo del segundo.

Pues bien, de la misma manera que el Derecho, los Derechos realmente existentes, contemplan siempre a los individuos en situaciones jurídicas particulares, así contemplan también al Estado. Los diferentes Derechos estudian siempre determinadas manifestaciones particulares del ejercicio del poder del Estado. Unicamente el Derecho Constitucional contempla el ejercicio general del poder, es decir, contempla el Estado exclusivamente como representante político general de los individuos, de la sociedad. En esto la diferencia entre el Derecho Constitucional y los demás Derechos vuelve a ser radical.

En efecto, todos los Derechos sin excepción tienen que ocuparse del Estado, de su manifestación de voluntad por el Poder Legislativo, de la ejecución de dicha manifestación de voluntad en términos generales por el Poder Ejecutivo y de su aplicación a los casos particulares por el Poder Judicial. Pero ninguno estudia ninguna de estas operaciones en cuanto tales, desde una perspec-

tiva general. Al contrario. Todos contemplan manifestaciones concretas de la voluntad del Estado tal como son definidas por el Poder Legislativo de manera individual y diferenciada: contemplan el Código Civil, el Código Penal, la Ley de Expropiación Forzosa o la que sea. Todos contemplan actos concretos y determinados de ejecución en términos generales de dichas manifestaciones de voluntad adoptados por el Poder Ejecutivo a través de decisiones del Consejo de Ministros con fechas precisas. Y todos contemplan también la aplicación de casos particulares tanto de las manifestaciones de voluntad del Estado como de sus actos de ejecución en términos generales a través de sentencias concretas y determinadas dictadas por jueces y magistrados integrados en los diversos órdenes jurisdiccionales: civil, penal, administrativo o laboral.

En todos los Derechos, con la excepción del Derecho Constitucional, todas las manifestaciones del poder del Estado se definen por el calificativo, que es lo que marca la diferencia específica que interesa a cada uno de ellos. No interesa la potestad legislativa del Estado y su forma objetivada de expresión, la ley, sino que interesan los ejercicios concretos de dicha potestad legislativa y su traducción en las leyes (civiles, penales, laborales, tributarias, etc.). No interesa la potestad ejecutiva del Estado y su forma objetivada de expresión, el reglamento, sino que interesan los ejercicios concretos de dicha potestad ejecutiva y su traducción en los reglamentos de ejecución de las distintas leyes. No interesa la potestad jurisdiccional del Estado y su forma objetivada de expresión, la sentencia, sino que interesan los ejercicios concretos de dicha potestad jurisdiccional y su traducción en sentencias civiles, penales, etc.

Únicamente el Derecho Constitucional contempla al Estado en cuanto representante político general de los individuos, de la sociedad, sin más. Por eso estudia la manifestación de voluntad del Estado a través del ejercicio de la potestad legislativa por el Parlamento y no la ley concreta y específica a través de la cual el Poder Legislativo ejerce real y efectivamente dicha potestad. Para el Derecho Constitucional es indiferente que la ley aprobada por el Parlamento sea el Código Civil o el Código Penal. Al Derecho Constitucional le interesa la ley y no las leyes, la categoría normativa y no sus manifestaciones individuales. Y lo mismo ocurre con la ejecución de la manifestación de voluntad del Estado en términos generales. Al Derecho Constitucional le interesa el Gobierno en cuanto Poder Ejecutivo del Estado, en cuanto instrumento de ejecución de la ley y no de las leyes y se ocupa, por tanto, de la potestad reglamentaria, pero no de los reglamentos. Y lo mismo ocurre también con la aplicación de la manifestación de voluntad del Estado a los casos particulares. Para el Derecho Constitucional no existe la jurisdicción civil o penal, ni los Juzgados de Primera Instancia o Instrucción, ni las Audiencias provinciales, sino únicamente el Poder Judicial en cuanto portador del momento exclusivamente jurí-

dico del Estado a través del cual se da respuesta a un conflicto surgido en la aplicación de una norma, independientemente de cuál sea ésta.

Esto es lo que singulariza al Derecho Constitucional y lo distingue de los demás Derechos. El Derecho Constitucional es el único Derecho que contempla los dos polos indispensables para que el Derecho exista en cuanto tales y no en sus diversas formas de manifestación. Es el único cuyo objeto de estudio es exclusivamente *el ciudadano y sus derechos y el Estado y sus poderes*. El objeto del Derecho Constitucional es el estudio de aquello que hace que los individuos sean ciudadanos y de aquello que hace que el poder político sea el Estado, así como de las relaciones entre ambos polos en los que la existencia *del* Derecho descansa. El único Derecho que contempla *el* Derecho sin calificativo es el Derecho Constitucional.

Justamente por eso, el Derecho Constitucional es lo único que tienen en común todos los demás Derechos. El Derecho Constitucional es el portador de los elementos más simples y generales a partir de los cuales se constituyen todos los demás Derechos. Por eso es el punto de partida de todos ellos sin excepción. Sin el Derecho Constitucional el resto del Derecho resulta ininteligible. No es, en consecuencia, como se suele decir con frecuencia, el punto de partida del Derecho público, sino el punto de partida de *todo* el Derecho, tanto del público como del privado. El Derecho no tiene más que un tronco, que es el Derecho Constitucional. Y solamente tiene un tronco, porque únicamente en él se expresa sin calificativos de ningún tipo el *principio de igualdad*. La igualdad es el Derecho y la igualdad en cuanto tal sólo está presente en el Derecho Constitucional.

Esta es la razón por la que el estudio del Derecho se tiene que empezar por el Derecho Constitucional. Por esto es por lo que la enseñanza del Derecho Constitucional se hace y tiene que hacerse en el primer curso de la licenciatura y no puede no hacerse sino en él. Todos los demás Derechos encuentran su fundamento en el Derecho Constitucional y son impensables científicamente sin él.

Pero por eso también, el estudio del Derecho Constitucional es la vía más apropiada para empezar a hacer frente a las cuatro circunstancias que dificultan el aprendizaje del oficio de jurista que ya conocemos.

Lo es, en primer lugar, porque el Derecho Constitucional es el único Derecho cuyo estudio se puede empezar de cero. El estudiante no necesita saber nada de Derecho para estudiar Derecho Constitucional, porque el estudio del Derecho Constitucional no presupone la existencia de ningún conocimiento jurídico previo. Con él empieza el Derecho, ya que los dos elementos necesarios para que el Derecho sea posible, el ciudadano y el Estado, los derechos fundamentales y la división de poderes, es el objeto del Derecho Constitucional.

A partir de aquí, pero no antes, se puede empezar a hablar de Derecho. Por eso el combate contra la ignorancia jurídica tiene que empezar por el Derecho Constitucional.

En segundo lugar, el Derecho Constitucional es el Derecho en el que se tiene que iniciar el aprendizaje del idioma jurídico. Si, como se ha dicho antes, el Derecho Constitucional es el Derecho portador de los elementos más simples pero, por ello mismo, más generales a partir de los cuales se constituyen los demás Derechos, también es, precisamente por eso, el portador de los conceptos jurídicos más generales y universales. El vocabulario del Derecho Constitucional es el vocabulario jurídico general, básico, que constituye el presupuesto para su diversificación ulterior en las distintas ramas del Derecho. El vocabulario del Derecho Constitucional es el único vocabulario común para todas las ramas del Derecho. Sin él no es posible el aprendizaje del vocabulario jurídico especializado de los demás Derechos. Por eso la enseñanza del castellano jurídico tiene que empezar por aquí.

También por aquí tiene que empezar, en tercer lugar, el aprendizaje de la «lógica jurídica». El Derecho Constitucional es el Derecho *más objetivo* de todos los Derechos, en la medida en que no contempla a los individuos en situaciones jurídicas particulares, en lo que tienen de diferente unos individuos de otros, sino en lo que tienen de igual. Es por ello el Derecho en el que debe iniciarse el aprendizaje del «*dogma de la imparcialidad*», que debe presidir la formación del jurista y cuya aplicación en el mundo real, en las relaciones sociales estudiadas por los demás Derechos, siempre está sometido a algún tipo de desviación. En este momento es pertinente una analogía con el mundo de la física. De la misma manera que la definición de la gravedad, que gobierna el reino de la naturaleza, exige la construcción del vacío, aunque su vigencia se afirme en un mundo real en el que el vacío no existe, así también ocurre con el principio de igualdad, que gobierna el reino de la sociedad. La definición de la igualdad también exige construir el vacío, exige prescindir de las relaciones sociales concretas que establecen los individuos, que son las únicas que dan un sentido al principio de igualdad y en las cuales tiene que afirmarse. Esta es la tarea del Derecho Constitucional: la definición de la igualdad, cuya vigencia real y efectiva tiene que confirmarse en las diversas relaciones sociales estudiadas por los demás Derechos. Por eso el Derecho Constitucional es *punto de partida, pero también límite*, para los demás Derechos. Pues sólo serán admisibles en el mundo del Derecho aquellas correcciones o desviaciones del principio de igualdad que no lo desnaturalicen, que no lo hagan irreconocible. Esta es la razón por la que la «lógica jurídica», objetiva y despersonalizada, imparcial, tiene que empezar a enseñarse en el Derecho Constitucional. El *canon de imparcialidad*, que no es otra cosa que el canon de la igualdad considerado

desde un punto de vista instrumental, con el que hay que medir todo el Derecho, todos los Derechos, se define en el Derecho Constitucional. Todo razonamiento jurídico, sea en el terreno que sea, tiene que girar en torno a él.

También se debe empezar, en cuarto lugar, el aprendizaje del Derecho por el Derecho Constitucional, porque al ser éste la manifestación más inmediata y directa del principio de igualdad, es un terreno en el que no es necesaria una experiencia social tan amplia y tan diversificada como en los demás Derechos. También desde este punto de vista es lógico, por tanto, que se empiece por él.

Este es el lugar y esta es la función del Derecho Constitucional en la formación del jurista. El Derecho Constitucional es *el Derecho que da unidad al mundo del Derecho*. O dicho de otra manera: el Derecho es *un ordenamiento* por el Derecho Constitucional. Si no fuera por el Derecho Constitucional, los demás Derechos no podrían ser comprendidos y estudiados unitariamente, como formando parte de un todo.

El Derecho Constitucional expresa, pues, la unidad del Derecho. Los demás Derechos expresan la diversidad del universo jurídico. Sin el primero, no existiría el Derecho como un ordenamiento. Sin los segundos, no se podría dar respuesta a los problemas concretos que plantea la convivencia de los individuos en sociedad. Entre ambos hay, por tanto, una relación de complementariedad. El Derecho Constitucional es el *presupuesto y conditio sine qua non* de los demás Derechos. Los demás Derechos son el *para qué* del Derecho Constitucional.

De este carácter del Derecho Constitucional como Derecho que da unidad al mundo del Derecho, se desprende una exigencia de excepcional importancia para su exposición científica y para su enseñanza. La siguiente: *el Derecho Constitucional tiene que ser explicado y enseñado unitariamente*. No hay nada que perturbe más el proceso de aprendizaje del jurista que la enseñanza no unitaria del Derecho Constitucional. Pues, ¿cómo va a poder ser explicado unitariamente el ordenamiento jurídico, si no es explicado de esa manera el Derecho del que depende su unidad?; ¿cómo puede el jurista formarse una idea unitaria del mundo del Derecho, si no se le enseña y, en consecuencia, aprende que ese mundo plural y diversificado tiene un centro único en torno al cual gira permanentemente?

Hace unos años, cuando estaba empezando la redacción de un «Curso de Derecho Constitucional», recuerdo que tropecé por casualidad, leyendo en un periódico la reseña de unas sesiones de gastronomía de unos cursos de verano, con una frase de Paul Bocuse que decía así: «Una cocina sin fuego es como una puta sin culo.» Apenas la leí, me dí cuenta de que esa frase expresaba, en su terreno y a su manera por supuesto, lo que yo quería hacer en dicho Curso de Derecho Constitucional. Por eso no sólo no creo que se me vaya a olvidar

nunca, sino que me acuerdo de ella con frecuencia, sobre todo cuando tengo que empezar a explicar la asignatura en los primeros días de octubre.

Una cocina sin fuego no es una cocina, por mucha que sea la calidad del pescado, de la carne, de las verduras o de las sartenes. El fuego es lo que pone orden y da sentido a todo en una cocina, lo que hace que una cocina sea una cocina. Exactamente igual ocurre con el Derecho Constitucional. El principio de igualdad es en el Derecho Constitucional lo que el fuego en la cocina. Es lo que pone orden y da sentido a todo en el Derecho Constitucional, lo que hace que el Derecho Constitucional sea Derecho Constitucional y no otra cosa. Por eso un Derecho Constitucional no unitario es como una cocina sin fuego. Podrá ser una «estadística» de relaciones jurídico-públicas, como decía Von Gerber del Derecho Público previo al del Estado Constitucional, pero no una ciencia. Y por eso también, no se puede enseñar ni aprender (ojo a esto último) el Derecho Constitucional como una yuxtaposición de temas. Eso es más que un sinsentido, es un disparate. Supone gravar el proceso inicial de formación del jurista con una hipoteca, que exigirá el pago de intereses elevadísimos antes de que pueda ser levantada.

Dicho en pocas palabras: el Derecho Constitucional es el principio de igualdad y el principio de igualdad es el que gobierna el universo jurídico. Por eso todo el Derecho, todos los Derechos, tienen que ser explicados a partir del Derecho Constitucional. Pero, por eso también, el Derecho Constitucional tiene que ser explicado unitariamente a partir del principio de igualdad.